

Noemí Goldman

Tradiciones discursivas y noción de “gobierno mixto” en el Río de la Plata en los inicios de su vida independiente

La discusión sobre las formas de organización política constituye un tema mayor del proceso abierto por la crisis de la Monarquía española y las guerras de independencia en el Río de la Plata a comienzos del siglo XIX. Los protagonistas de la Revolución de Mayo de 1810 consolidaron con éxito la independencia, pero no lograron fundar sobre bases jurídico políticas estables el nuevo poder surgido de ella. Durante la primera mitad del siglo XIX, la organización política de las provincias del ex Virreinato permaneció indefinida y en los distintos momentos del proceso, los pueblos oscilaron entre la unión a los gobiernos centrales, la simple autonomía y la adhesión de hecho a propuestas confederales. Con el objeto de explicar el fracaso en la construcción de un Estado-Nación durante la primera mitad del siglo XIX, la historiografía tradicional del período insistió en la falta de originalidad o inadecuación a la realidad de los primeros ensayos constitucionales. Sin embargo, estas interpretaciones estuvieron sujetas en los últimos años a importantes revisiones que hicieron posible una reorientación general de las perspectivas de investigación sobre el período, como desarrollan (Chiaramonte 1997, Goldman 1998). En efecto, las nuevas perspectivas de análisis pusieron de manifiesto que menos que una inadecuación a la realidad, emergieron proyectos de organización política basados en tradiciones y lenguajes políticos que admitían la coexistencia de diferentes tendencias hacia la organización nacional, y sujetos políticos que oscilaron entre unas y otras.

El presente trabajo se ubica en el marco de esta reorientación para indagar una nueva dimensión del debate sobre las formas de gobierno y su incidencia en el proceso independentista: la confluencia de las tradiciones vinculadas con el derecho natural y la antigua teoría del “gobierno mixto” en las particulares formas discursivas en las que se actualizó en el Río de la Plata. Esta reorientación se propone asimismo

desplazar la cuestión de los modelos desde una problemática centrada en la exégesis de las fracasadas constituciones, limitada a medir el grado de originalidad o imitación respecto de los modelos constitucionales europeo y norteamericano, hacia una interrogación sobre las concepciones en torno a la selección, apropiación y traducción de esos modelos en vinculación con ciertas tradiciones discursivas y sus usos locales. En este sentido, se postula la necesidad de articular una historia de las concepciones y proposiciones políticas, con un estudio centrado en las prácticas de apropiación de los modelos. Un antecedente de esta perspectiva fue mi estudio del uso del modelo “jacobino” en la historiografía y en los discursos políticos de los líderes de la Revolución de Mayo de 1810 –Moreno, Castelli y Monteagudo–, donde desplazé el interés por las influencias doctrinales hacia el estudio de las nociones en torno a las cuales se construyó una visión de la Revolución (Goldman 1992, 2000).

Mi indagación se inicia con una relectura de ciertos tópicos de *Las Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina* de Juan B. Alberdi, que constituyó el texto fundacional de la ansiada organización constitucional. Publicado en 1852, previo a la reunión del Congreso que proclamó la definitiva Constitución republicana, representativa y federal argentina (1853), tuvo por objetivo presentar un programa preciso para superar largos años de desunión y guerras civiles entre las provincias rioplatenses, y un proyecto de nuevo país.

1. Los mismos vocablos en contextos diferentes

En este texto, la cuestión de los modelos se inserta en el debate constitucional para desplazarse hacia las condiciones políticas, culturales, sociales y económicas de la construcción de la nación. Este desplazamiento presupone, en primer lugar, el reconocimiento de la historia propia reciente que se traduce en la conciliación de las dos tendencias hacia la organización nacional –la confederal y la unitaria–, y en segundo lugar, en la elaboración de una fórmula superadora. Así, escribe Alberdi:

El poder respectivo de esos hechos anteriores, tanto unitarios como federativos, conduce la opinión pública de aquella República (se refiere a la República Argentina) al abandono de todo sistema exclusivo y al alejamiento de las dos tendencias o principios, que habiendo aspirado en vano

al gobierno exclusivo del país, durante una lucha estéril alimentada por largos años, buscan hoy una fusión parlamentaria en el seno de un sistema mixto, que abrace y concilie las *libertades de cada provincia y las prerrogativas de toda la nación*: solución inevitable y única, que resulta de la aplicación a los dos grandes términos del problema argentino –la *Nación* y la *Provincia*– de la fórmula llamada hoy a presidir la política moderna, que consiste en la combinación armónica de la *individualidad* con la *generalidad*, del *localismo* con la *nación*, o bien de la *libertad* con la *asociación* (Alberdi 1957: 95).

Esta fórmula superadora, que no se limita a la propuesta de una nueva forma de gobierno de compromiso, derivaba asimismo de las lecciones extraídas de los procesos políticos y las ideas dominantes en la historia universal. Alberdi despliega un preciso análisis de los distintos modelos americanos y europeos existentes y, aunque crítica a la generación que le precedió, no parece alejarse de ella en la consideración del tipo de *correspondencia* a establecer con la cultura europea:

Tenemos ideas equivocadas sobre el valor de los conocimientos constitucionales de nuestros hombres más eminentes de ese tiempo. La nueva generación los estima según las impresiones y recuerdos de niñez. Sin duda sabían mucho comparados con su tiempo y con los medios de instrucción que tuvieron a su alcance. Pero la misma ciencia europea con que nutrían sus cabezas ha hecho adelantos posteriores, que nos han permitido sobrepasarlos, sin que valgamos más que ellos como talentos, por una ventaja debida al progreso de las ideas (Alberdi 1957: 174-175).

Sin embargo, si miramos más detenidamente, es bajo una nueva figura de la traducción como se desarrollan sus reflexiones. La orientación para el diseño constitucional que propone es buscada, no en el conocimiento de la letra de las constituciones como lo habría realizado preferentemente el grupo revolucionario, sino en la inteligencia política para captar las ideas y tendencias dominantes de los hombres de la época. Así, una suerte de *manipulación* debe operar el dirigente en la selección de las formas extranjeras a adoptar, que contemple los diferentes hechos y tendencias contrapuestos existentes en la búsqueda de una conciliación de *intereses*. La inteligencia política es antepuesta a cualquier consideración doctrinaria.

En efecto, Alberdi había formado parte de la denominada “Nueva Generación” que en 1837 creó el primer movimiento intelectual romántico, que propuso un proyecto de transformación cultural integrador, vinculado a la necesidad de construir una identidad nacional. La construcción de esta identidad se inspiró en el principio de las

nacionalidades para dar cohesión a los nuevos proyectos de nación. En la definición de las distintas etapas por las que atravesó la generación, obligada al destierro por largos años durante el gobierno del caudillo Juan Manuel de Rosas, fue la experiencia del exilio chileno (década del cuarenta) la que terminó por cristalizar una identidad argentina por oposición a la chilena, reemplazando así a las identidades provinciales aún presentes entre sus miembros.

Esta nueva identidad que se reclama integradora de las tendencias políticas que se enfrentaron a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, rechaza en el mismo gesto al pasado colonial e indígena: “Necesitamos cambiar nuestras gentes incapaces de libertad por otras gentes hábiles para ella, sin abdicar el tipo de nuestra raza original, y mucho menos el señorío del país; suplantar nuestra actual familia argentina por otra igualmente argentina, pero más capaz de libertad, de riqueza y progreso” (Alberdi 1957: 179). Esto es: fomentar en Argentina la población anglosajona. No se trata del exterminio de los nativos sino, como bien señaló Oscar Terán (2000: 228-232), de “un programa derivativista de la mezcla”, que partía del presupuesto de la inferioridad civilizadora del criollo, quien era no obstante pasible de educación por medio de la *mezcla* con los buenos europeos nacidos. La interrogación acerca de la “buena mezcla” se renovará hasta principios del siglo XX ante la presencia masiva de inmigrantes.

Ahora bien, las críticas de Alberdi a la generación que le precedió parten de un supuesto conceptual que en tiempos de la independencia se hallaba en fuerte disputa. Alberdi afirmaba:

De las tres formas esenciales de gobierno que reconoce la ciencia, el monárquico, el aristocrático, y el republicano, este último ha sido proclamado por la revolución americana como el gobierno de estos países. No hay, pues lugar a cuestión sobre forma de gobierno. En cuanto al fondo, éste reside originariamente en la Nación, y la democracia, entre nosotros, más que una forma, es la esencia misma del gobierno. La federación o unidad, es decir, la mayor o menos centralidad del gobierno general, son un incidente, un accesorio subalterno de la forma de gobierno. Este accesorio, sin embargo, ha dominado toda la cuestión constitucional de la República Argentina hasta aquí (Alberdi 1957: 107).

Alberdi continúa esta reflexión observando que unitarios y federales pecaron por igual al extremar sus ideas. Los primeros sólo habrían concebido la federación como simple y pura alianza de poderes independientes e inconexos; los segundos, pecaron por exclusivistas.

Ambos habrían desconocido, según Alberdi, la naturaleza del “gobierno mixto”. Pero, y según se desprenderá de nuestro análisis, lo que para Alberdi parece ya obvio hacia 1850, no lo fue para la generación que le precedió, quien empleó los mismos vocablos para inscribirse en diferentes tradiciones discursivas. El “fondo” señalado por Alberdi, es decir, la cuestión de la soberanía, fue hacia 1820 lo que se encontraba justamente en disputa entre unitarios y confederales. Asimismo, no se trataba para esa época de mayor o menor centralización del poder, sino de la posibilidad misma de constituir un gobierno general.

Los problemas implicados en una posible organización de un Estado rioplatense luego de la independencia partieron de dos supuestos contrapuestos y en conflicto: el de la soberanía de la nación versus la soberanía de las provincias. En el primer caso, para sostener posiciones unitarias, y en el segundo, para fundamentar alguna de las variantes llamadas federales, que de hecho fueron confederales. Sin embargo, los hombres públicos del período oscilaron entre las dos posturas y optaron por combinaciones que se fundaban en variantes de la teoría del “gobierno mixto”.

2. Apropiación y correspondencia de modelos

Al iniciar mi exposición señalé el propósito de pasar de una problemática de las influencias doctrinales a una de la traducción, luego de constatar que el debate sobre la cuestión constitucional adquirió la forma de una disputa sobre cómo debía establecerse la correspondencia con los modelos extranjeros. En este sentido, reconocer el carácter “mediado” de la cultura rioplatense –por ejemplo, en cuanto al valor positivo que en la época se le asignó al plagio–, requiere distinguir las prácticas de apropiación de los modelos bajo las diversas formas de la “combinación”.

La indefinición del sistema político consiguiente a las guerras de Independencia en el Río de la Plata instaló un debate público sobre las posibles formas de gobierno, que adquirió la forma de una disputa acerca de cómo debía establecerse la *correspondencia* con los modelos extranjeros y su misma selección: “Se dice, y con mucha razón, que todas las formas de Gobierno son buenas consideradas en abstracto”¹,

1 *La Crónica Argentina*, n° 26, 16 de noviembre de 1816.

si bien todos partían de este principio, el problema surgió al poner en *correspondencia* este postulado con las realidades rioplatenses: la cuestión fue práctica y de lenguaje.

El principio de la “combinación”, según el cual la mejor Constitución es el resultado de una adecuada mezcla entre las diversas formas de gobierno, derivaba de una vieja tradición griega retomada por el constitucionalismo dieciochesco europeo, para oponerse a la teoría de la Constitución pura identificada con el Absolutismo; y está presente ya en los primeros textos que tratan la cuestión constitucional en el Río de la Plata. En 1810 Mariano Moreno, secretario de gobierno y guerra de la Primera Junta, rechaza las “formas absolutas”, por incluir “defectos gravísimos”, sostiene la necesidad de la mezcla y la combinación de todas las formas, y refiere al “modelo único” de Inglaterra por su división y equilibrio de poderes que integra al rey y a los pueblos.²

En 1816, el redactor del periódico *El Censor* propone para el Río de la Plata una monarquía temperada inspirada en el modelo constitucional gaditano, aunque con algunas reservas. Antonio José Valdés observa que en su tiempo hablar de monarquía significaba hacerlo de una forma mixta: “la constitución que las cortes de España dieron a su nación, venía a ser esencialmente una democracia monárquica, o un gobierno popular bajo el orden de monarquía”.³ Y, más adelante, luego de criticar la “excesiva liberalidad” de la Constitución española de 1812 que destruyó en “todos los asuntos públicos hasta la denominación de real”, consideró que una monarquía constitucional sólo difería de una república por el hecho de que en la primera “el magistrado es uno solo, y la organización del cuerpo político más inclinada al centro de unidad”.⁴

En efecto, para 1816, Valdés compartió junto a un sector importante de la élite letrada y política de Buenos Aires, una solución monárquica tendiente a garantizar la independencia recién proclamada de las provincias del Río de la Plata, frente al regreso al trono español de Fernando VII, la formación de la Santa Alianza en Europa y el avance de la influencia de José Gervasio Artigas en las provincias del interior.

2 *Gazeta Extraordinaria de Buenos-Ayres*, del 6 de noviembre de 1810.

3 *El Censor*, p. 6846.

4 *El Censor*, p. 6847.

Sin embargo, si bien primó en Valdés la opción por un régimen que privilegiaba la unidad ante los peligros externos y las crecientes tendencias autonómicas internas, el redactor no dejó de advertir que estas últimas tenían un fundamento doctrinal legítimo:

La idea de provincialismo nada tiene de violenta en lo que ella es en sí; yo mismo he calculado a vista de nuestras cosas, y he manifestado en mis discursos que ningún gobierno podemos adoptar que no sea el de una confederación bien organizada, en que hay tanto avanzado; o si atendemos a nuestras costumbres inveteradas y al espíritu de la Europa y proximidad de Portugal, una monarquía constitucional.⁵

Esta idea se vinculaba con una antigua tradición discursiva hispánica que sostenía el principio de la “soberanía radical” –defendida por los diputados americanos en las Cortes de Cádiz–, y que se oponía a la noción de una soberanía única e inalienable, adoptada por los diputados liberales españoles por medio del adverbio “esencialmente”, empleado como atributo intransferible de la colectividad nacional, como advierte Varela Suanzes-Carpegna (1983: 86-89).

En los fundamentos de la Constitución de 1819, que dicta el Congreso General Constituyente reunido en la ciudad de Tucumán luego de haber declarado la independencia de las Provincias Unidas en Sud-América, los diputados expresaron:

No es menos funesto a una nación verse convertida en un mar borrasco por las agitaciones intestinas de la simple democracia, que en un vasto y silencioso calabozo por la arbitrariedad, y despotismo. En ninguna de estas situaciones puede el hombre gozar con seguridad de aquellos bienes que hacen preferible la sociedad a la vida errante de los salvajes. En precaución de estos males la comisión en su Proyecto ha llevado la idea de apropiarse al sistema gubernativo del país, las principales ventajas de los gobiernos monárquico, aristocrático y democrático, evitando sus abusos (Ravignani 1937: 376).

En el diseño de esta curiosa combinación el poder ejecutivo fue depositado en una sola persona, de modo que adoptase lo que se consideraba una cualidad importante de las monarquías: su capacidad de garantizar la unidad. El senado por su composición debía aprovechar lo útil de la aristocracia al integrar en su seno a los ciudadanos con goce de fuero: la clase militar, la eclesiástica, y aquellos que se distinguían por sus riquezas y talentos. Finalmente, la cámara de representantes se reservaba a los ciudadanos de la clase común, sin goce de fuero, para

5 *El Censor*, p. 6784.

darle carácter de democracia al nuevo esquema constitucional. Bajo la división de poderes se nos presenta una peculiar adaptación de la noción clásica de “gobierno mixto”, pues se procura “balancear” el poder incorporando a los diferentes “sujetos” sociales que componían la sociedad virreinal. Así, la separación funcional del poder se fundamenta en la división basada en las partes corporativas que constituyen la sociedad. Pero esta adaptación de la teoría clásica del gobierno mixto cobrará nuevo sentido unos años más tarde.

En 1820 se disuelve el gobierno central y se inicia un proceso de formación de soberanías autónomas con instituciones propias. Varias provincias se dan sus constituciones y permanecen en virtual autonomía hasta 1824 en que Buenos Aires convoca a un nuevo Congreso Constituyente (1824-1827). En el marco de este Congreso se dictó la Ley Fundamental que reconocía una situación de hecho: el estado confederativo en el cual se hallaban las provincias. Por ello hasta tanto se dictase una Constitución que debía ser sometida para su aceptación o rechazo a los pueblos, se delegaba el Ejecutivo Nacional provisorio en Buenos Aires.

El reconocimiento de esta situación ubicó la discusión constitucional y la de los modelos en otro escenario que planteó un nuevo interrogante: ¿cómo preparar a los pueblos para que acepten organizarse en Estado-Nación? Fracasado el proyecto constitucional de 1819 ya no se trataba de buscar la traducción perfecta de una combinación de formas en un código constitucional, sino de organizar previamente el Estado por medio de leyes particulares.

Esto reflejaba un estado de la opinión pública de Buenos Aires con relación al nuevo debate en el Congreso, ya no sobre el carácter provisional o permanente de una Constitución, sino la opción por una Constitución escrita o leyes particulares y graduales para la organización del futuro Estado. Es Julián Segundo de Agüero, diputado por Buenos Aires, quien desarrolla una extensa argumentación en favor de una organización gradual. Así, propone una constitución paulatina del país, según lo vaya permitiendo su organización, por medio de leyes, no provisionales a clara, sino leyes que organicen el Estado-Nación, estableciendo primero el poder ejecutivo, luego el legislativo y finalmente el judicial, y preparando, asimismo, a los pueblos a recibir la constitución definitiva.

En este punto, la introducción del modelo inglés para dar cuenta de esta organización progresiva, suscitó una discusión con el diputado de la provincia de Salta, Juan Ignacio de Gorriti, que descubre dos conceptos de constitución opuestos: uno *histórico tradicional*, en el sentido de leyes constitucionales dictadas progresivamente; el otro, *positivo*, en el sentido de un código constitucional fijo. Sin embargo, si miramos más de cerca la propuesta de Agüero en el contexto de su recepción en la prensa política, descubriremos que menos que una *imitación* del modelo inglés se trata de una adaptación del propio modelo de Buenos Aires y su modo particular de organizar instituciones propias. Efectivamente, la provincia de Buenos Aires, que no dictó una Constitución a diferencia de la mayoría de los Estados provinciales, reguló con relativo éxito el funcionamiento de sus instituciones por medio de leyes dictadas entre 1821-1824, y prácticas no formalizadas que se erigieron en principios constitutivos del nuevo régimen político, otorgando a la Sala de Representantes, encargada del Poder Legislativo, un papel fundamental.

Pero cabe aquí contemplar una tercera variante, representada por Gorriti, que partiendo del principio del libre consentimiento de los pueblos para participar en “su pacto de asociación”, así como del necesario conocimiento previo de las “bases de la asociación”, para ingresar en ella, consideró que el mejor régimen era el de unidad y se pronunció a favor de Bernardino Rivadavia. Gorriti expresa claramente una de las corrientes dominantes del pensamiento político de la época: la que derivando sus principios básicos del derecho natural y de gentes, basa la acción política en el libre consentimiento (Chiaramonte 2004). Al mismo tiempo no dejó de apoyar la fórmula unitaria que se impuso en el nuevo Congreso General Constituyente reunido entre 1824 y 1827 para discutir la posibilidad de elaborar un nuevo texto constitucional que reuniese a las provincias en una nueva asociación.

Gorriti entiende claramente que lo que está en juego es si habrá “asociación política” o no. En enero de 1827 fue comisionado por el Congreso para presentar la nueva Constitución elaborada en 1826, ante el gobernador Bustos y la Sala de Representantes de la provincia de Córdoba. La legislatura cordobesa la rechazó y se le acordaron cuarenta y ocho horas de plazo para abandonar la provincia. En el *Informe* sobre el resultado de su fracasada misión, Gorriti sostuvo que la Constitución era la más liberal que se haya conocido hasta el momen-

to por reunir lo mejor de los diferentes regímenes republicanos. Asimismo fue muy crítico de la oposición de Córdoba donde vio no la manifestación de tendencias federales sino simplemente autonómicas: “Luego las autoridades de Córdoba resisten la constitución, no por la forma de gobierno adoptada, no por las leyes de que, sin fundamento, se quejan sino porque es constitución; y del mismo modo resistirán otra cualquiera que imponga un orden que sea necesario respetar...”.

El Congreso no pudo sobrevivir a esta aceleración de la organización constitucional impulsada por los unitarios, y terminó disolviéndose en medio de la guerra contra el Brasil y la guerra civil en las provincias del interior para no volver a reunirse hasta 1853.

3. A modo de conclusión

Llegado a este punto surge la siguiente pregunta: ¿Desconocieron los hombres públicos de la Revolución la verdadera naturaleza del gobierno mixto, según afirmaría unos años más tarde Alberdi? Es claro que el “estado de las cosas”, como gustaban llamar a la disolución del poder central y el consiguiente proceso de formación de soberanías autónoma, extremó, por un lado, los particularismos no sólo en las provincias interiores sino también en Buenos Aires; por otro, las ideas centralistas que prevalecieron en los gobiernos revolucionarios desde 1810 cristalizaron en un proyecto unitario hacia 1826. Sin embargo, según vimos, no parece que aquellos hombres hayan desconocido del todo la naturaleza mixta de los gobiernos. En el debate del nuevo proyecto de Constitución en el seno del Congreso surgieron voces que reclamaron, como la del diputado Amenabar, “un prospecto de constitución bajo la forma de gobierno temperado, quiero decir, no adoptándose del todo el sistema de federación ni el de unidad; combinándose ciertos puntos principales, sobre los cuales se descubre la intención de las provincias para que se eligiera un sistema mixto de ambas formas” (Ravignani 1937, tomo II: 20). Los unitarios también fundaron sus propuestas en el principio de la combinación, aunque consideraban que en todo gobierno mixto debía prevalecer un elemento sobre el otro.

El mismo Dictamen de la Comisión de negocios constitucionales del Congreso señalaba: “es ya un proverbio entre los políticos que ningún gobierno simple es bueno; porque las formas simples son degradadas y viciosas [...] Solamente las formas mixtas convienen a las socie-

dades modernas [...]”. Sin embargo, Alberdi no se equivocaba al afirmar que los unitarios “se han engañado cuando han creído que no había más federación que las simples y puras alianzas de poderes independientes e inconexos [...]”. Aunque cabe observar que el diagnóstico de los unitarios no fue del todo errado ante la explosión de tendencias autonómicas desatadas por la Revolución que se acercaban más a la confederación que a la federación. De modo que el interrogante final sería: ¿los unitarios inscribieron sus discursos en la tradición de gobierno mixto o fue un simple recurso retórico para ahogar las voces que, como las del diputado Amenabar, insistían en la necesidad de adoptar una fórmula de “gobierno temperado”. Vimos como en 1819 la fórmula de gobierno mixto adoptada derivaba de la teoría clásica, al recomponer en forma explícita las tres formas de gobierno históricamente conocidas: la democracia, la aristocracia y la monarquía. En 1826, la Constitución unitaria designa como “gobierno mixto” a la creación de consejos administrativos electivos en las provincias y del nuevo texto desaparecen todos los rasgos corporativos que contenía la Constitución del 19. La noción de gobierno mixto se asocia entonces a la moderna separación funcional de poderes, alejándose de la división clásica que se basada en las partes constitutivas de la sociedad; pero, y curiosamente, lejos del modelo inglés, se combina con la afirmación de una única soberanía. Es justamente en estas adaptaciones donde se verifica la singularidad de la tradición discursiva rioplatense.

Referencias bibliográficas

- Alberdi, Juan Bautista (1957): *Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina*. Buenos Aires: Colección Literaria Sopena.
- Chiaramonte, José Carlos (1997): *Ciudades, Provincias, Estados. Orígenes de la Nación Argentina*. Buenos Aires: Ariel.
- (2004): *Nación y Estado en Iberoamérica. El lenguaje político en tiempos de las independencias*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
- Goldman, Noemí (1992 [2000]): *Historia y Lenguaje. Los discursos de la Revolución de Mayo*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina; [reedición: Editores de América Latina].
- (dir.) (1998): *Revolución, República, Confederación (1806-1852)*. Tomo III de la Nueva Historia Argentina, Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
- (2000): “Libertad de Imprenta, opinión pública y debate constitucional en el Río de la Plata (1810-1827)”. En *Prismas, Revista de Historia Intelectual* (Buenos Aires), nº 4, p. 9-20.

- Ravignani Emilio (comp.) (1937): *Asambleas Constituyentes Argentinas*. Tomos I y II. Buenos Aires: Casa Jacobo Peuser.
- Salas, Rubén Darío (1998): *Lenguaje, Estado y Poder en el Río de la Plata (1816-182)*. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones de Historia del derecho, Buenos Aires.
- Terán, (2000): *Vida intelectual e el Buenos Aires fin-de-siglo (1880-1910). Derivas de la "cultura científica"*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Argentina.
- Varela Suanzes-Carpegna, Joaquín (1983): *La teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispánico (Las Cortes de Cádiz)*. Madrid: Centro de Estudios Hispánicos.
- Ternavasio, Marcela (1998): "Las reformas rivadavianas en Buenos Aires y el Congreso General Constituyente (1820-1827)". En Goldman, Noemí (dir.): *Revolución, República, Confederación (1806-1852)*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, Capítulo V.